
EL NUEVO HORIZONTE ECONOMICO ARGENTINO

Héctor Gambarotta*

El objetivo de este trabajo es reseñar la evolución de la economía argentina en los '90. Primero, se pasa rápida revista a los esquemas de gestión gubernamental de las últimas décadas. Luego se sintetiza el planteo de la estrategia del gobierno del presidente Carlos S. Menem para después presentar un balance de resultados y extraer algunas conclusiones acerca del futuro del país.

I. EL CAMINO QUE QUEDO ATRAS

La política económica argentina entre 1945 y 1989 recorrió distintas etapas: primero, estuvo dominada por el interés de alcanzar el pleno empleo (1945-1958), luego preocupada por encontrar un compromiso entre inflación y empleo (1958-1975), más adelante concentrada en la búsqueda de fuentes de financiamiento externas que permitieran extender dicho compromiso en el tiempo (1975-1981) y finalmente, dedicada a manejar el creciente endeudamiento resultante de manera que afectase lo menos posible el nivel de actividad (1982-1989).

La sociedad de los años '50 se embarcó de lleno en la búsqueda del pleno empleo. La crisis de los años '30 había sido de tal impacto sobre la ocupación que convenció a políticos y economistas de lo adecuado de concentrarse sobre este objetivo de manera primordial. La sustitución de importaciones se convirtió en Argentina en el eje de las políticas de generación de empleo. Este desarrollo "hacia adentro" no surgió como una elección teórica sino que fue producto de las circunstancias: la evolución de las relaciones de precios internacionales y el fuerte proteccionismo de los países industriales en la época hacían impensable poder plantearse como alternativa el desarrollo "hacia afuera". Fue así como el Estado tomó la forma de un ente abiertamente impulsor de la industrialización.

La sustitución de importaciones encontró rápidamente en los límites del crecimiento de la demanda interna un freno que —por un lado, realimentó problemas fiscales y por otro, hizo emerger fuertes desequilibrios en el balance de pagos. La interpretación libre y laxa de conceptos tales como pleno empleo y sustitución de importaciones elevó el gasto público a niveles que hicieron necesaria la ampliación

de la base imponible en una magnitud tal que convirtió a la carga impositiva en un impedimento manifiesto para el desarrollo fluido de la actividad productiva.

Los déficits presupuestarios se multiplicaron, los precios subieron. Una evidente sobredeterminación de objetivos —incentivar el desarrollo económico (establecimiento de subsidios), manejar el ciclo económico (instalación de compensaciones) e inducir una mejor distribución del ingreso (fijación de pautas salariales), en el marco de una endeble formulación presupuestaria y una precaria programación financiera, desembocó en desbordes fiscales y monetarios que echaron por tierra los logros alcanzados trabajosamente por la estrategia en el campo de la economía real.

La excesiva concentración sobre el cumplimiento del objetivo de pleno empleo en un marco de equidad hizo emerger el problema de la inflación. Así fue como la sociedad argentina hacia fines de los '60 comenzó a vivir mayoritariamente obsesionada por recuperar la estabilidad. Los programas de estabilización se instalaron como una tarea cotidiana de gobierno. Pero ningún político (o militar) se sintió con autoridad suficiente como para sostenerlos como objetivo único, siempre se presentaron como algo pasajero, como un alto necesario para retomar un camino perdido. En los hechos, la estabilidad llegó para agregarse al objetivo del pleno empleo en el discurso político, no para reemplazarlo como meta única.

Una sucesión ecléctica de planteos macroeconómicos buscando compatibilizar los objetivos de pleno empleo y estabilidad prácticamente agotó todas las fuentes de financiamiento del desarrollo disponibles, utilizándolas hasta sus últimas consecuencias. Se debilitó el respaldo de la moneda (uso de reservas), se desequilibraron las cuentas fiscales (utilización de fondos previsionales), se resintió la confianza (expansión monetaria), se cerró el acceso a fuentes alternativas de crédito (excesivo uso de fuentes internas y externas) y se desfavoreció la formación de ahorro doméstico (estatización de depósitos bancarios).

El FMI pasó a jugar un papel crucial en la evolución de la coyuntura económica argentina al constituirse en la práctica en la única fuente de financiamiento a la cual podía recurrirse con relativa prontitud para enfrentar los acuciantes desequilibrios macroeconómicos que se manifestaban recurrentemente. La práctica del "stop and go" se generalizó, llevando a la economía argentina a la profundización de sus ciclos sin poder resolver de manera integral ni el problema del empleo ni los dilemas que planteaba la inflación.

* Héctor Gambarotta fué Secretario de Estado para las Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. Actualmente es Subsecretario de Acción de Gobierno de la Presidencia de la Nación, República Argentina.

El agotamiento de alternativas en la búsqueda del compromiso entre estabilidad y pleno empleo en un marco de equidad desgastó a los gobiernos civiles y condujo a repetidos golpes de estado. El autoritarismo militar intentaba suplir las carencias del paradigma económico dominante. Se imaginaba una sociedad sin vasos comunicantes, la ideología autoritaria hablaba de soluciones secuenciales —primero, lo económico, luego lo político, finalmente: lo social. Lo real fue que el intento autoritario terminó echando mano al endeudamiento externo como vía de escape para dominar los problemas emergentes de los desequilibrios internos entre el ahorro y la inversión.

El ajuste llegó a Argentina hacia la segunda mitad de los '70 como consecuencia de la falta de adecuación estructural de su economía a las nuevas realidades planteadas por su rápido y creciente endeudamiento. Pero, los gobiernos que abrazaban este planteo lo hacían sin animarse a pagar sus consecuencias. Así, el tratamiento de la deuda externa se hizo extremadamente dificultoso y progresivamente el ahogo financiero externo se volcó sobre ellos bajo la forma de una crisis de confianza. El nivel de inflación escapó totalmente al control de las autoridades económicas, sumiendo al país en una crisis que arrastró al propio gobierno democrático electo en 1983.

II. EL NUEVO RUMBO

A partir de 1989 el nuevo gobierno democrático desplegó un contundente esquema de reforma económica que postuló que los capitales internacionales fluirían masivamente hacia el país en cuanto se mostraran resultados en materia de estabilidad y crecimiento como corolario de un planteo fiscal austero, un manejo monetario prudente, un sistema de incentivos basado en una extendida vigencia de las reglas de mercado y una fuerte liberalización comercial y financiera. Cómo lograr pleno empleo, estabilidad y eficiencia en una economía abierta a un mercado de capitales globalizado se constituyó en el verdadero desafío al que debía responder la política económica.

La estrategia se ancló sobre un extenso paquete de medidas que posibilitara multiplicar la inversión, aumentar la productividad y reducir los costos locales de producción. Ante las limitaciones que había demostrado el ajuste (eliminación del déficit fiscal) por sí mismo, el nuevo gobierno reconoció la necesidad de complementarlo. Se avanzó simultáneamente en la apertura (baja de aranceles y desaparición de restricciones cuantitativas a la importación) y la desregulación (libre funcionamiento del sistema de precios determinado por el mercado). Para coronar este esfuerzo, al inicio de 1991 se instaló la regla de convertibilidad que despejó la incertidumbre cambiaria que por décadas había dominado a la economía nacional y luego se renegoció la deuda externa en el marco del Plan Brady que consolidó y reestructuró plazos, tasas y montos del endeudamiento, permitiendo el reingreso del país al mercado de crédito voluntario.

Se modeló un esquema de desregulación y privatizaciones para acompañar al ajuste induciendo una masiva trans-

ferencia de actividades a la esfera del mercado. La ley de Reforma del Estado y la ley de Emergencia Económica dieron el marco jurídico a un vasto proceso de redefinición de las reglas básicas que normaban la actividad económica. El sistema impositivo fue reformulado, se redujeron las alícuotas y se procedió a su simplificación, quedando sólo seis impuestos sobre los que descansa el 97% de la recaudación a partir de la eliminación de veinte tributos que distorsionaban la formación de precios. El nuevo esquema permitió bajar la evasión fiscal y ampliar el número de contribuyentes.

Las privatizaciones alcanzaron a la gran mayoría de las empresas del Estado. La venta de las unidades de producción de acero, petróleo, gas, transporte aéreo, ferrocarriles y telecomunicaciones, etc., representó un ingreso para el fisco —en efectivo y bonos de deuda en valor nominal, de US\$ 25.000 millones. Asimismo, un renovado conjunto de leyes laborales ayudó a flexibilizar el mercado de trabajo reduciendo el costo de la mano de obra, a la vez que la privatización del sistema de jubilaciones contribuyó a abrir un horizonte de certidumbre sobre el valor de las prestaciones futuras de seguridad social y a consolidar una expectativa de fortalecimiento fiscal en el largo plazo.

Se estructuró una apertura que trajo consigo una referencia cierta y concreta de eficiencia. Se le puso a los costos locales una explícita necesidad de adecuación a reglas más estrictas, dándole pautas transnacionales de comportamiento a la actividad local. Los aranceles que en 1988 llegaban a un máximo del 50% — rondando un promedio del 39%, se redujeron a un máximo del 20%, rindiendo el conjunto un promedio del 10%. A su vez, las cuotas y licencias de importación que protegían cerca del 40% de la producción nacional quedaron reducidas a la cobertura parcial de la industria automotriz y algunos bienes usados.

A partir de estas medidas, la atención de los responsables de la política económica se volcó masivamente hacia el establecimiento de condiciones para que surgieran negocios que mostraran capacidad de competir en el mercado mundial. Se desmontaron antiguas estructuras de organización productiva, tratándose de generar reglas de juego que aumentaran las posibilidades de desplegar nuevas prácticas empresariales. En este contexto, se incentivó un rápido desarrollo de integración económica en el MERCOSUR, suscribiéndose en marzo de 1991 el Tratado de Asunción con Brasil, Paraguay y Uruguay, alcanzándose una unión aduanera con estos países a principios de 1995.

Resultó evidente que un cambio económico de la magnitud del que traía consigo la reforma no podía agotarse en sí mismo. Su radio de influencia también se extendió de manera contundente a lo social, lo político y lo tecnológico. Su evolución fue quedando progresivamente definida por:

i) el complejo grado de aceptabilidad política, que se expresó en diferentes formas de articulación del gabinete económico y el Poder Legislativo y otros foros de opinión y decisión política de forma tal que se logró trabajosamente el afianzamiento del apoyo a la reforma dentro del marco de la democracia;

ii) el manifiesto grado de tolerabilidad social, que permitió absorber su impacto sobre la distribución del ingreso y las oportunidades de empleo;

iii) el significativo grado de adaptabilidad tecnológica, que demostró la rápida adecuación de gran número de empresas a las nuevas condiciones de competencia.

El pleno funcionamiento de las instituciones democráticas, el incremento de la paz social y los resultados económicos alcanzados demuestran que el programa de reforma constituye un fundamento sólido para consolidar un horizonte de desarrollo del país en el largo plazo.

III. LOS LOGROS ALCANZADOS

Los resultados alcanzados tras más de seis años de gestión señalan un claro balance favorable. La economía que había permanecido estancada por más de una década creció a un ritmo acumulativo anual promedio del 5% entre 1989 y 1995. Los motores de este crecimiento han sido la inversión y las exportaciones. La inversión se expandió a una tasa promedio del 10 % anual, mientras que las exportaciones pasaron de US\$ 9.600 millones a un total estimado en US\$ 21.000 millones en el periodo mencionado más arriba.

Los precios (IPC) que subían a una tasa de más del 3000% en 1989 —luego de haber permanecido en un promedio anual superior al 200% durante el resto de la década del '80, llegaron a tasas menores al 10% a mediados de 1993 y ya reflejan una variación anual de sólo el 1,6% a fines de 1995, representando el nivel más bajo de los últimos 50 años. Dada la traumática experiencia del pasado y las ventajas del presente, la estabilidad se ha instalado como un valor social altamente apreciado por los argentinos

La austeridad en el manejo de las cuentas públicas se convirtió en la pauta central de la administración del estado. El déficit fiscal que era del orden del 17% en 1989 pasó a ser —en promedio, menos del 1% anual para el periodo 1990/95. Se respetó la disciplina monetaria cumpliendo la ley de convertibilidad —que establece el total respaldo de la circulación monetaria con reservas internacionales, habiendo crecido entre 1989 y 1995 los recursos monetarios (M4) en pesos y en dólares del 9,9% al 18,7% del PBI. El tipo de cambio nominal se mantiene inalterado desde principios de 1991 hasta la fecha, contrastando con el uso y abuso de las devaluaciones que caracterizaron a las gestiones económicas argentinas por décadas.

Los avances macroeconómicos fueron acompañados por sensibles mejoras en la disponibilidad de infraestructura económica entre 1989 y 1995: las líneas telefónicas instaladas que alcanzaban entonces 3,4 millones llegan hoy a 6,3 millones. La potencia instalada de generación eléctrica (GW) subió de 15,2 a 19,3. La red nacional pavimentada en buen estado que representaba 15% del total mejoró al 72%. La población servida con agua potable pasó de 21,2 millones a 25,2 millones.

La desregulación produjo entre 1991 y 1994 importantes reducciones en los costos industriales derivados principalmente de las rebajas en las tarifas de los servicios (32%), la caída de los precios de los insumos industriales (8%) y la disminución de la carga impositiva (57%).

Los indicadores sociales también registran significativas mejoras. El gasto público social pasó del 14% del PBI en

1989 a representar el 18% en 1994. La tasa de mortalidad infantil se redujo en dicho período de 25,7 por mil al 20,8. La población considerada bajo la línea de pobreza que en 1988 alcanzaba al 29% del total, descendió al 16,1% en 1994. Estos incrementos del bienestar quedan reflejados en la mejora del posicionamiento de Argentina en el Índice de Desarrollo Humano que publica el PNUD: mientras el país se ubicaba en el puesto 46º en 1993, llega al puesto 30º en 1995.

Los mercados financieros internacionales dieron cuenta del cambio ocurrido en Argentina: mientras el riesgo-país (medido por la brecha entre la TIR del Bonex 89 y la LIBOR) llegaba a fines de 1989 al 31,9% se redujo al 4,2% a fines de 1995. En términos comparativos, es importante subrayar que de las cuatro condiciones establecidas en Maastricht, Argentina cumple con tres: aquellas referidas al nivel de inflación, al grado de endeudamiento público y al peso del déficit fiscal, cuando algunos países de la Unión Europea fallan en el intento.

En definitiva, a partir de la certeza que instala la estabilidad se ha logrado reconstruir el sentido de futuro —perdido tras largas décadas de inflación y estancamiento, y ello hace posible dibujar una nueva geografía económica del país en el horizonte del mediano plazo. No sólo cuantitativamente las cosas están cambiando. En términos cualitativos se abre un renovado abanico de posibilidades para el desarrollo de la actividad productiva. A partir de nuevas construcciones y reparaciones, las rutas del interior han quedado constituidas en verdaderos corredores bioceánicos de exportación al mejorarse su transitabilidad, abrirse numerosos pasos cordilleranos hacia Chile y construirse varios puentes de vinculación con Brasil. Testimonio de su relevancia son las cifras de comercio total (exportaciones+importaciones) con ambos países vecinos: entre 1989 y 1995 el volumen con Chile pasó de US\$ 470 a US\$ 2.000 millones, mientras que con Brasil lo hizo de US\$ 1.800 millones a US\$ 10.000 millones. Estos logros se apoyan sobre aumentos ocurridos entre 1991 y 1994 en la producción de bienes exportables. Como ejemplos notables —entre otros, pueden citarse los incrementos en la producción de manufacturas de cuero (118%), capturas pesqueras (47%), petróleo crudo (35%), automotores (194%), máquinas y aparatos eléctricos (312%), acero y laminados (25%), etc.

IV. LOS TEMAS ACTUALES

Luego de más de seis años de mantenimiento en la continuidad de las políticas, la firmeza de los objetivos y la perseverancia en los métodos de la reforma, la sociedad argentina debate hoy cómo se imbrica esta naciente eficiencia económica con el desarrollo humano, la racionalidad ecológica y la legitimidad política. La consolidación definitiva de la reforma va instalando "una manera distinta de hacer las cosas". A lo largo y a lo ancho del país se están desarrollando nuevas modalidades de gestión —tanto públicas como privadas, que potencian las capacidades locales en el marco de la globalidad, se percibe la rápida emergencia de

nuevas formas tecnológicas y el marcado aprovechamiento de la mundialización de los mercados

Sin embargo, pese a estos notorios avances, tres temas son hoy blanco de las críticas al gobierno. Primero, el elevado índice de desocupación (16%). Segundo, la lenta desregulación del sistema financiero local —un atraso típico de todo proceso de reforma, que induce la vigencia de altas tasas de interés real (10% anual TNA Prime del Banco Nación) y de una reducida oferta en el mercado de crédito doméstico (equivalente a 23% del PBI). Tercero, los notorios desequilibrios fiscales de las provincias.

El nivel de la tasa de interés, la persistencia del problema de la desocupación y las acuciantes necesidades de financiamiento de las provincias ha hecho pensar a algunos que la Argentina tiene que desandar el camino. Pese al rotundo triunfo electoral del gobierno en mayo del año pasado y a los resultados que hemos repasado, la oposición se ha aferrado a la idea de la necesidad de rectificar aspectos centrales de la estrategia (o abandonarla lisa y llanamente), tanto que uno de sus principales líderes expresó hace pocas semanas que "algo" de inflación no le haría mal a nadie, sin tener en cuenta de dónde venimos ni detenerse a pensar adónde vamos.

En realidad, estos planteos buscan esquivar el esfuerzo de manejarse en el desequilibrante mundo de producir en competencia respetando el equilibrio monetario y fiscal. Se trata de volver al viejo escenario donde se intentaba mantener el equilibrio productivo manipulando desequilibrios fiscales y monetarios. A las reglas se las quiere convertir en excepciones y a las excepciones en reglas, menuda diferencia. Mucho de lo que hoy se debate tiene que ver con el vértigo que genera el desequilibrante mundo de la competencia en empresarios acostumbrados a vivir al calor de la regulación y la protección del Estado.

Es así que frente a la estrategia de reforma en vigencia se han decantado tres posicionamientos: aquél que rechaza la reforma per se, el que la percibe como un camino lineal sujeto a un código totalizador rígido y el que reconoce su ineludible complejidad y discute sus ritmos y matices. Así, la esencia y el alcance que debe tener la reforma se ha convertido en objeto de polémica. Puesto en sus términos justos el debate actual debería ser encuadrado entre dos límites —aunque no siempre se lo hace. Por un lado, sería un problema si una reforma con escasas restricciones y compensaciones consolidara a su frente grupos de poder económico con fuerte capacidad monopólica que incitaran la conformación de una coalición reactiva por el bloqueo de la política. Por otro lado, también sería un problema si existiera un exceso compensatorio y reglamentarista que tendiera a desdibujar el programa y anular los beneficios esperados de la estrategia.

Las fuentes de diferenciación política fueron se decantando a medida que la reforma se fue afianzando. El logro de un ordenamiento fiscal a nivel nacional hizo aparecer costos, emergiendo demandas explícitas de compensación que encontraron cierto eco en las estructuras políticas nacionales. Con el progresivo avance del saneamiento fiscal, se extendió la exigencia de ajuste al orden provincial y municipal y, consecuentemente, se transfirieron las decisiones a niveles más inmediatos y —por ende, más permea-

bles, a una presión local focalizada. Por su parte, la permanencia de la apertura hizo que aquellos sectores que eran agentes dinámicos en las viejas condiciones de una economía cerrada con amplia presencia del Estado en la esfera económica, pasaran a constituir factores de presión que enfrentan con incomodidad las nuevas condiciones de una economía más abierta con predominio de lo privado por sobre lo público. A su vez, la desregulación (privatización) tendió a consolidar un nuevo esquema de toma de decisiones al dar lugar a significativas modificaciones de las reglas de juego que —en numerosos sectores, hicieron aparecer renovadas exigencias de idoneidad en el "management" que no siempre pudieron ser enfrentadas con éxito por las empresas.

Se instaló una necesidad y una urgencia de adaptación que potenció las demandas por restricciones y compensaciones a la reforma, pero también esta emergencia hizo reaccionar —por oposición, al reclamo por una mayor profundización de la reforma para que: (i) se afrontara con mayor severidad el ajuste —trayendo aparejada una más pronunciada demanda de saneamiento fiscal a nivel local, (ii) se extendiera la desregulación a otros campos —generando fuertes cambios en la estructura de precios relativos, y (iii) se procediera a la intensificación de la apertura —induciendo un aumento significativo de la competencia.

El gobierno se mueve entre estos dos polos. Navega sin abandonar el rumbo evaluando la validez de cada reclamo y actuando en consecuencia. Este enfoque resultó crucial para la continuidad de marcha de la estrategia ya que hizo que los ritmos del ajuste, la desregulación y la apertura fueran manejados con pragmatismo. Es cierto que —en la práctica, los desfases en la marcha de los distintos espacios de profundización (compensación) de la reforma han tendido a generar problemas (deseconomías) de implementación que tienen que ser superados sobre la marcha, pero no es menos cierto que haberse decidido por la ortodoxia total o por el abandono del planteo reformista también hubiera generado problemas.

Queda claro que la demanda por límites y compensaciones a la reforma se derivó de los tiempos diferentes de adaptación a la misma de los sectores sociales. Sucede que la exigencia de los consumidores surgió de forma espontánea —se manifestó en plenitud de una manera inmediata, ya que la simple disponibilidad de los bienes importados activó su reacción. Así, la demanda doméstica se adaptó a las calidades y precios de lo importado y transfirió instantáneamente al productor local la exigencia de competir con productos más sofisticados. Ciertamente no sucedió lo mismo con los servidores públicos y los empresarios que no pudieron responder con celeridad a las nuevas reglas de juego del ajuste y la desregulación.

Todas estas necesidades de compatibilización ponen en evidencia que lejos de llamar al "laissez faire", la reforma exige una activa programación de las políticas públicas que acompase sus ritmos de profundización con sus límites y compensaciones. Dejar librados al azar estos ritmos introduciría distorsiones en el sistema de precios que por sí mismas podrían constituirse en factores que imposibiliten el propio avance de la reforma. Sólo una visión naïve puede ignorar que —luego de la experiencia acumulada, para al-

canzar algún grado de éxito, se requiere tener en consideración un vasto número de compromisos y restricciones. Prestar atención a los límites y compensaciones que necesitan el ajuste, la desregulación y la apertura, ubicarlos en un contexto donde se valoren sus consecuencias políticas y sociales, encuadrarlos en el marco de las exigencias de la globalidad, no significa enfrentar la reforma contestatariamente sino —por el contrario, asumirla con responsabilidad.

Fue este enfoque el que permitió al gobierno llevar adelante su estrategia de manera airosa durante 1995, cuando las condiciones adversas del mercado mundial de capitales desatadas por la crisis mexicana de diciembre de 1994 le generaron el desafío de manejarse en el filo de la navaja. Se mantuvo el rumbo pero se manejaron una serie de disposiciones que permitieron superar las turbulencias en las que se vio envuelto el sistema financiero argentino.

En definitiva, a lo largo del tiempo la reforma argentina se ha tornado aceptable en términos políticos porque contempla límites y compensaciones que no le quitan su esencia y van modelando su soporte electoral en el marco de la democracia. Es tolerable en términos sociales porque está acompañada por el despliegue de programas de apoyo que acercan a empresarios y trabajadores al mejor aprovechamiento de las nuevas condiciones de competencia —como lo demuestran los vastos programas que se llevan a la práctica en el Plan Quinquenal 1995-1999 y por limitaciones a la apertura que morigeran el apetito de los consumidores —por caso, las recientes medidas sectoriales en materia de anti-dumping. Es funcional en términos tecnológicos porque utiliza medidas que aceleran la reconversión del aparato productivo sobre bases de sustentación de largo plazo —tal el caso del régimen especial automotriz.

Si en alguno de estos campos de compatibilización hubiera aparecido algún desequilibrio manifiesto —como quieren ver quienes critican el esquema reformista—, ello hubiera sido suficiente como para hacer emerger una coalición poderosa por el bloqueo a la vigencia de la modalidad de reforma imperante, ya sea —en un extremo, embanderándose con la profundización total del proceso —o en otro extremo, rechazando de plano la necesidad de toda reforma. Este no ha sido el caso ya que en las recientes elecciones nacionales el partido gobernante triunfó con el 50 % de los votos.

CONCLUSIONES

Queda claro que no se puede renunciar al objetivo de profundización de la reforma porque es el rumbo que se ha elegido para enfrentar la globalización. Lo demanda la credibilidad del gobierno. Pero también es cierto que el cumplimiento del objetivo de profundización necesita ser mate-

rializado sujeto a compromisos y restricciones. Lo exigen la imperfección de los mercados de bienes locales y los distintos ritmos de adaptación de los sectores sociales a las nuevas condiciones. Además, no se puede ignorar el contexto mundializado en el cual se despliega la reforma. Lo determina la creciente globalización. Quien minimice esta interdependencia conceptual (profundización/compensación/mundialización) de las políticas públicas de hoy día, tendrá que estar dispuesto a correr el riesgo que los resultados económicos de sus políticas se esfumen, a enfrentar un creciente grado de imprevisibilidad en las lealtades políticas de los electorados, y a exponerse a una mayor ebullición de las tensiones sociales.

En definitiva, la pregunta estratégica válida sobre la ponderación de los temas de la agenda de las políticas públicas responde hoy a un solo núcleo: cómo persuadir a los actores sociales para que puedan acelerar su transformación en verdaderos impulsores de una genuina proyección nacional sujeta a un marco mundial (global) de exigencias múltiples ineludibles. Se trata de una realidad nueva —difícil de discernir, no siempre comprendida en toda su dimensión por todo el gobierno y la oposición. Ya nadie puede pensar a la reforma como algo pasajero, la economía y la sociedad han sido remodeladas, las matrices del pasado han perdido vigencia.

En síntesis, un severo ajuste, una marcada apertura y una profunda desregulación —encuadradas por la acelerada integración del MERCOSUR, han cambiando en pocos años el clima y la base material de los negocios en Argentina. Se retomó el crecimiento y se afianzó la estabilidad. La disciplina monetaria y la austeridad fiscal se instalaron como prácticas insustituibles para el manejo macroeconómico.

Los problemas que perduran señalan la necesidad de continuar modelando la reforma estructural emprendida. La baja de la desocupación, la reducción de la tasa de interés y el saneamiento de las finanzas provinciales y municipales son metas compatibles con el modelo en marcha que reclaman la continuidad de una acción enérgica dirigida a acelerar la adaptación de las formas de gestión —tanto públicas como privadas, a las exigencias de la competitividad. Avanzar en este sentido resulta crucial ya que aquellos países que no se adaptan conveniente y rápidamente al proceso de globalización sufren una "fuga de actividades" hacia regiones del mundo más dinámicas, quedando —en definitiva, envueltos en la vieja trampa del aislamiento.

Nota: Las fuentes de los datos estadísticos son las siguientes publicaciones del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos:

- Argentina: Un país para invertir y crecer
- Plan Quinquenal 1995-1999
- Informe Económico Trimestral (varios números)
- Anuario Estadístico de la República Argentina 1995

RESUMEN

Gambarotta hace un repaso de los diferentes esquemas de gestión gubernamental de las últimas décadas en Argentina, para después hacer un balance de resultados económicos para este país y de los temas actuales más conflictivos: el desempleo, la lenta desregulación del sistema financiero local y el reducido nivel de capital doméstico.

ABSTRACT

Gambarotta checks the different paths of the government management in Argentina during the last decades, and after he makes a balance of economical outcomes for this country and of the main issues in this moment: unemployment, the slow desregulation of local financial system and the small level of domestic capital.